

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo además presente:

1º) Que previo a hacerse cargo de los planteamientos de la apelante, es conveniente precisar dos cosas.

La primera, que habiéndose deducido un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 163, 166, 167, 171, inciso segundo; y 174, inciso primero, del Código Sanitario, aplicables a esta causa, el Tribunal Constitucional desestimó dicho recurso en los autos rol N° 13.384-22 INA por sentencia de trece de junio de dos mil veintitrés, según consta a folio 15.

La segunda, que el presente caso tiene su origen en dos sumarios sanitarios que se instruyeron en contra de KDM por el SEREMI de Salud de la región metropolitana bajo los números 3330 y 3812 del año 2017 conforme a las visitas efectuadas por funcionarios de ese servicio a las dependencias de la Estación de Transferencia ubicada en la comuna de Quilicura (ETQ).

Ambos sumarios se resolvieron en forma conjunta mediante la Resolución Exenta N° 7492 de 29 de noviembre de 2017 sancionando a KDM a una multa de 1000 UTM. Dicha sanción fue objeto de reposición, la que fue desestimada por Resolución Exenta N° 2666 de 23 de abril de 2018, por lo que se acudió a sede jurisdiccional conforme al artículo 171 del Código Sanitario sustanciándose la presente causa.

2º) Que el primer reproche que se hace al fallo por KDM, consiste en señalar que éste, al igual que la resolución N° 7492 no hace un análisis lógico, coherente y completo de los medios de prueba allegados por su parte y que permiten acreditar la falta de responsabilidad en las infracciones que se imputan y desde esa



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSGXXXGJVEJ

forma le atribuye una falta de motivación. Considera que la resolución reclamada solo hace una reproducción de las actas, de los descargos pero no se entregan razones para explicar por qué la autoridad adoptó la decisión ni se valora la prueba rendida.

Sobre el particular, la impugnante se limita a señalar que su prueba no fue ponderada, sin especificar de qué manera los medios de prueba que allegó, identificándolos en su escrito de apelación, podría haber cambiado el escenario al que se enfrenta.

Ahora bien, del texto de la sentencia apelada es posible advertir que en el considerando sexto el fallo transcribe la resolución sancionatoria, enseguida en el motivo siguiente señala las facultades que tiene el tribunal conforme al artículo 171 del Código Sanitario y concluye que los hechos que motivaron la sanción se encuentran acreditados y apunta específicamente a lo dispuesto en el artículo 166 del mismo cuerpo legal que dispone que basta para dar por establecida la infracción *“el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”* y así menciona las dos actas de los sumarios sanitarios que dan cuenta de la infracción, reproduciendo al efecto la situación fáctica comprobada en los días en que se hizo la fiscalización. Por lo demás, la reclamante no discute el contenido de las actas, las que incluso transcribe también en su reclamación.

3°) Que incluso si se revisa el contenido de la reclamación presentada ante la judicatura civil, se advierte que la reclamante reconoce los hechos constatados por la autoridad fiscalizadora en cuanto mantenía residuos tanto en el galpón de escombros, plataforma de carga, así como en el patio interior de la Estación de Transferencia, pero dice que ello obedeció a un caso fortuito o fuerza mayor sin que pudiese imputársele una conducta dolosa o



negligente y por ello su prueba se orientó a demostrar los presupuestos de esta eximente de responsabilidad.

Así afirma que en el primer sumario, el hecho externo constitutivo de caso fortuito fue el descarrilamiento del tren que transportaba residuos desde la Estación de Transferencia hasta el Relleno Sanitario Loma Los Colorados y que imposibilitó realizar el traslado de residuos por vía férrea hasta su reparación y revisión. En el segundo caso el hecho externo estaría constituido por dos situaciones; una, la negociación colectiva compleja con dos de los sindicatos lo que provocó una disminución de la fuerza de trabajo y, la otra situación fue el aumento del ingreso de residuos provenientes de planes de limpieza de vertederos ilegales aplicados por las comunas de Renca y Pudahuel, durante la última semana de septiembre.

Sin embargo, la cuestión que se reprocha es que la Estación de Transferencia no puede ser utilizada para el almacenamiento de residuos domiciliarios y en el evento que fuere menester almacenar para una contingencia, se requiere autorización sanitaria previa, la que en ninguno de los casos se obtuvo.

4°) Que entonces no se trata que la autoridad desconozca el descarrilamiento del tren, en el primer caso o que se haya iniciado un proceso de negociación colectiva que fueron los hechos que se dieron a conocer a la autoridad, sino que lo reprochable es utilizar un espacio en el que no puede almacenar residuos domiciliarios sin autorización.

Por lo tanto cabe preguntarse ¿hubo almacenamiento de residuos domiciliarios en una estación de transferencia? La respuesta es sí, porque incluso la reclamante lo reconoce; ¿hubo autorización sanitaria para proceder de ese modo ante la



contingencia?, la respuesta es no; ¿hay alguna prueba que demuestre lo contrario? Nuevamente la respuesta es no.

Luego cabe preguntarse si necesita la autoridad sanitaria al imponer la sanción, analizar las fotografías o correos electrónicos que demuestran los hechos del descarrilamiento o el acopio de residuos, obviamente que no requiere mayor ponderación porque tales supuestos no están controvertidos.

Es más, de la propia prueba acompañada al sumario (folio 7) consta a fojas 18 un correo electrónico de KDM relativo al incidente del día 21 de agosto de 2017, en el cual se señala como Plan de Contingencia “...*la acumulación temporal de residuos en: Plataforma Superior, Galpón de escombros y acumulación de residuos secos en Patio Abierto, mientras dure la contingencia. (esto último necesitamos autorización).*” En consecuencia, si la propia reclamante está consciente que para esa contingencia necesitaba autorización para almacenar residuos en la Estación de Transferencia y, sin embargo no la obtuvo soslayando así la obligación de la que estaba en conocimiento que debía cumplir, ¿qué otra prueba se necesita para demostrar la infracción? Francamente nada más.

En relación a la huelga que se aduce respecto del segundo sumario, de los propios correos electrónicos consta (fojas 102 del sumario) que la huelga no se verificó, no obstante en el mismo se informa la acumulación de residuos en la Estación de Transferencia.

De esta forma, la denuncia sobre falta de valoración de la prueba como razón para revocar la decisión no tiene asidero.

5°) Que en segundo término la impugnante niega que exista una infracción a la Resolución N° 9980, de 26 de junio de 1996 del Servicio de Salud del Medio Ambiente que fue la que autorizó



el proyecto de ingeniería de la ETQ, pues afirma que conforme a dicha resolución la Estación está destinada a la recepción de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, su almacenamiento y posterior transporte al Relleno Sanitario “Lomas Los Colorados”. Añade que incluso en el hipotético caso que se prohibiese en forma expresa el almacenamiento, de todas formas la autoridad sanitaria y el tribunal podrían haber concluido que KDM no incurrió en la infracción si hubieran ponderado la prueba rendida. Al respecto la recurrente hace referencia a la prueba testimonial de la reclamada y sostiene que el propio fiscalizador señala que no está autorizado el acopio por más de 24 horas, de lo que infiere entonces que si el acopio es menor a dicho tiempo sí estaría autorizado. Agrega que no entender que puede acopiarse residuos en forma transitoria es desconocer la forma de operar en el traslado de residuos.

En relación a esta impugnación, llama la atención que por una parte se afirme que existe autorización para el acopio de residuos domiciliarios de acuerdo a la Resolución N° 9980, en circunstancias que, como se vio, desde la propia KDM se envía un correo electrónico (mencionado en el motivo cuarto de esta sentencia) en que se hace presente que para dicho almacenaje se requiere autorización. Por lo que cabría preguntarse ¿para qué pedir autorización si se estima que ella no es necesaria?

Por otro lado, una cosa es el acopio para realizar el transporte desde la Estación de Transferencia hasta el relleno sanitario y una muy diversa es almacenar residuos domiciliarios por varios días como ocurrió en las dos fiscalizaciones. En este entendido, ni siquiera la referencia a los dichos del fiscalizador sirve al fin que se pretende puesto que el acopio efectuado claramente superó las 24 horas. En efecto en el primer hecho la



fiscalización se realizó el día 23 de agosto, dejándose constancia que el incidente del descarrilamiento ocurrió el día 21 y que se estimaba el despeje de la estación para el día 25 de agosto, superándose con creces las 24 horas. En el segundo hecho, la inspección se realizó el 27 de septiembre de 2017 constatando nuevamente acopio de residuos en la ETQ, indicándose que para el día 1 de octubre estaría sin acopios, nuevamente las 24 horas son claramente superadas.

Con todo, la forma de operar de la estación de transferencia que se detalla en la apelación evidentemente debiera ser la ordinaria o común en donde llegan los residuos y de ahí son transferidos al relleno sanitario, más aquello no fue lo que ocurrió en los dos eventos fiscalizados pues simplemente se almacenaron los residuos domiciliarios por varios días, generando una crisis sanitaria que hizo necesaria la intervención de la autoridad.

6°) Que señala además la reclamante que en su oportunidad la propia SEREMI en un informe de consecuencias respecto del cierre del relleno sanitario Lomas Los Colorados como de la querella presentada por la Intendencia de la región metropolitana, y de publicaciones de prensa, a propósito del eventual cierre del relleno, en acciones contra la Municipalidad de Tiltill (recurso de protección rol 51.602-2017 de esta Corte) se sostuvo por la autoridad que la ETQ tenía una capacidad de almacenaje de 8000 toneladas en caso de cerrarse el relleno sanitario, por lo que dice no entender la falta de congruencia en que por un lado acepte la posibilidad de almacenamiento en caso de contingencia y por otra sancione a KDM por realizar lo que precisamente considera posible.



Nuevamente la reclamante incurre en el error de pretender que la posibilidad de realizar el mencionado almacenaje puede hacerse ante el solo evento de ocurrencia de lo que ella califique de contingencia, olvidando que el reproche que se le hace es no haber pedido autorización para llevar adelante un acopio de residuos domiciliarios por varios días con el evidente riesgo sanitario que ello implica, transformando así la naturaleza intrínseca de una estación de transferencia por una de almacenaje.

7°) Que en relación a la necesidad de autorización por parte de la autoridad sanitaria, alude a la actualización del plan de contingencia, refiere que dada la importante repercusión que sus servicios tienen en las condiciones sanitarias de la región metropolitana recibiendo cerca de 50% de los residuos domiciliarios de la región no puede simplemente impedir el paso de los camiones recolectores por los graves inconvenientes viales y sanitarios que acarrea por lo que el plan de contingencia tiene por objeto fijar acciones inmediatas que se deben adoptar y no demorar su implementación para obtener la correspondiente autorización en cada contingencia. Alude también al Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, que en su artículo 43 dispone que establecida la contingencia, debe adoptar de inmediato las medidas indicadas en el plan y dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el evento deberá remitir a la autoridad sanitaria un informe, cuestiones que dice haber cumplido. Reprocha también que por más de siete años la autoridad no se pronuncie sobre las medidas propuestas para afrontar una contingencia.

En relación a este argumento, la reclamante bajo su entender no podría esperar la obtención de una autorización para



efectuar el almacenaje, olvidando que estas situaciones de contingencia debieran ser excepcionales y que tan pronto las advierta, nada impide que efectuó la solicitud de autorización pues el acopio se supone transitorio, sin embargo en el caso que se revisa fueron días de almacenaje pudiendo siempre pedir la autorización desde el primer día, más aún si la empresa estaba plenamente consciente que necesitaba esta autorización tal como se da cuenta en el correo electrónico a que se ha hecho referencia con antelación.

8°) Que finalmente la reclamante alude al Plan de Contingencia y las medidas de mitigación, indicando que hay un reconocimiento por parte de la autoridad que la ETQ está autorizada para almacenar residuos siempre que sea por un período determinado en contradicción a lo que se dice después de que no estaría autorizada, y luego reitera que en los hechos objeto de las fiscalizaciones se verificó caso fortuito y fuerza mayor.

Al respecto, la reclamante confunde la posibilidad eventual que pueda almacenarse residuos domiciliarios frente a una determinada contingencia, para lo cual, es la autoridad sanitaria la que debe autorizar esta circunstancia excepcional, con la pretensión suya de entender que siempre existe esa autorización. En otras palabras, es claro que en la ETQ no puede almacenarse residuos domiciliarios y si ocurre algún evento en que ello se advierta necesario –como puede ser un caso fortuito- deberá pedirse autorización a la autoridad sanitaria. De esta forma aun en un caso fortuito KDM debe pedir la autorización y aquí no lo hizo.

9°) Que en relación a las alegaciones efectuadas, llama la atención que estas sean tan similares a las verificadas en la causa rol Corte Suprema N° 6704-2019 oportunidad en que se



sancionó a KDM por hechos similares, planteando las mismas defensas todas las cuales fueron desechadas por la referida Corte.

10°) En cuanto a la cuantía de la multa, el artículo 174 del Código Sanitario solo establece un rango para su aplicación, el que ha sido respetado en esta causa. Al respecto cabe tener en cuenta que la Corte Suprema en la causa aludida en el motivo anterior indicó que no podía revisarse la cuantía “salvo en caso de verificarse contrariedad a derecho en el actuar de la Administración”, circunstancia que no se divide en este caso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 171 del Código Sanitario y 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de diecinueve de febrero de dos mil veinte dictada en los autos C-14.076-2018 del 14° Juzgado Civil de Santiago.

Redactó la ministra Mireya López Miranda.

Regístrese y en su oportunidad devuélvase.

No firma la Ministra señora Merino Verdugo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

N°Civil-14700-2020.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSGXXGJVEJ

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia López M. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSGXXXGJVEJ